

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS DEL INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE ADOPTAR LAS MEDIDAS CAUTELARES A QUE HUBIERE LUGAR, FORMULADAS POR EL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO **N1-ELIMINADO 1** DENTRO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ESPECIAL, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE PSE-QUEJA-230/2024.

### RESULTANDOS<sup>1</sup>:

**1. Calendario Integral del Proceso Electoral Local Concurrente 2023–2024.** El dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco<sup>2</sup> mediante acuerdo identificado con clave alfanumérica IEPC-ACG-060/2023<sup>3</sup>, aprobó el Calendario Integral para el Proceso Electoral Local Concurrente 2023–2024.

**2. Inicio del Proceso Electoral Local Concurrente 2023–2024.** De conformidad al calendario integral del proceso electoral, el uno de noviembre de dos mil veintitrés, dio inicio el proceso electoral local concurrente 2023–2024 en el Estado de Jalisco, cuyas fechas relevantes son las siguientes:

Precampañas para gubernatura	para	05 de noviembre de 2023 al 03 de enero de 2024
Precampañas para diputaciones y municipales	para	25 de noviembre de 2023 al 03 de enero de 2024
Campañas para la gubernatura	para la	01 de marzo al 29 de mayo de 2024
Campañas para diputaciones y municipales	para	31 de marzo al 29 de mayo de 2024
Jornada electoral		02 de junio de 2024

**3. Presentación del escrito de denuncia.** El uno de mayo, se recibió el escrito signado por el candidato a munícipe de Guadalajara, Jalisco, **N2-ELIMINADO 1** por hechos que

<sup>1</sup> Las fechas a que se refiere la presente resolución corresponden al año dos mil veinticuatro, salvo que se mencione lo contrario.

<sup>2</sup> En lo sucesivo Instituto Electoral

<sup>3</sup> Consultable en: <https://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/sesiones-de-consejo/consejo%20general/2023-09-18/Siepc-acg-060-2023notaclaratoria.pdf>

<sup>4</sup> A quien se le denominará denunciante, promovente o quejoso.

considera violatorios a la normatividad electoral vigente, cuya realización atribuye al partido político **Movimiento Ciudadano**. Además, solicitó la adopción de medidas cautelares.

**2. Acuerdo de radicación, ampliación de término y práctica de diligencias.** El dos de mayo, la Secretaría Ejecutiva de este Instituto<sup>5</sup>, acordó radicar el presente expediente con clave alfanumérica **PSE-QUEJA-230/2024**, asimismo, a efecto de estar en aptitud de resolver sobre la admisión o desechamiento del procedimiento, ordenó llevar a cabo la verificación de existencia y contenido de los hipervínculos precisados en el escrito de denuncia.

**3. Acta circunstanciada.** El cinco de mayo, se elaboró el acta circunstanciada de clave alfanumérica **IEPC-OE-328/2024**, mediante la cual, personal de la Oficialía Electoral debidamente investido de fe pública y legalmente facultado para el ejercicio de dicha función, verificó la existencia y contenido de los vínculos de internet precisados en la denuncia.

**4. Acuerdo de admisión a trámite y emplazamiento.** El treinta y uno de mayo, se determinó admitir a trámite la denuncia interpuesta por el ciudadano **N3-ELIMINADO 1** por lo que se ordenó emplazar a las partes.

**5. Proyecto de medida cautelar y remisión de constancias.** Mediante **memorándum 138/2024** notificado el treinta y uno de mayo, la Secretaría Ejecutiva hizo del conocimiento de la Comisión de Quejas y Denuncias de este Instituto, el contenido de los acuerdos citados en el resultando que antecede y remitió vía electrónica las constancias que integran el expediente relativo al Procedimiento Administrativo Sancionador Especial identificado con el número de expediente PSE-QUEJA-230/2024, a efecto de que ese órgano colegiado determinara lo conducente sobre la adopción de las medidas solicitadas por la parte denunciante.

## **CONSIDERANDO:**

**I. Competencia.** La Comisión de Quejas y Denuncias es el órgano técnico del Instituto Electoral, competente para determinar lo conducente respecto a la adopción de medidas cautelares en los procedimientos administrativos sancionadores, en términos de lo dispuesto por los artículos 469,

---

<sup>5</sup> En lo sucesivo, la Secretaría Ejecutiva.

párrafo 4 del Código Electoral del Estado de Jalisco<sup>6</sup>; 35, párrafo 1, fracción III del Reglamento Interior del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco; 1 y 10, párrafos 3, 4 y 5, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

**II. Hechos denunciados.** Del análisis de la denuncia formulada, se desprende que el promovente se queja, esencialmente de actos de calumnia electoral en contra de su persona, por parte del partido político Movimiento Ciudadano, pues refiere que, mediante un videoclip publicado en cuatro redes sociales diferentes, se evidencia una campaña de desprestigio en su contra, la cual señala como “guerra sucia” o “campaña negra”, con lo que se busca incidir en el próximo proceso electoral

**III. Solicitud de medidas cautelares.** El promovente solicita que se adopten las medidas cautelares en los términos que a continuación se transcriben:

*“Derivado de lo expuesto a lo largo de la presente denuncia, en términos de lo que establece el artículo 10 del Reglamento de Quejas y Denuncias, considero necesario que se otorguen las siguientes medidas cautelares:*

- A. Se otorgue como medida urgente, el apercibimiento al denunciado para que se abstengan de continuar con las calumnias hacia mi persona.*
- B. La eliminación inmediata de las publicaciones señaladas en este escrito, a fin que sea borrado y eliminado el video que se denuncia, así como todas aquellas que de oficio advierta esta autoridad.*
- C. Para que el partido político Movimiento Ciudadano, así como sus militantes y simpatizantes y cualquier otra persona que de oficio advierta a esta autoridad, se abstenga de continuar generando actos de calumnia en mi contra.*
- D. Todas aquellas que de oficio otorgue esta autoridad.”*

**IV. Pruebas ofrecidas.** Una vez que fue analizado íntegramente el escrito de queja, se advierte que el denunciante ofreció como medios de prueba los siguientes:

*“I. Técnica. Misma que consiste en las imágenes que se insertan en este escrito, en las que se desprende la conducta denunciada.*

---

<sup>6</sup> En lo siguiente, Código Electoral.

*II. Documental Pública: Consistente en la certificación de la diligencia de oficialía electoral, respecto de la existencia y contenido de las publicaciones que contextualizan el objeto de denuncia del presente curso, las cuales se encuentran disponibles para su conducta en las ligas siguientes:*

- <https://www.facebook.com/MovCiudadanoJal/posts/pfbid02egXrEnWSB7i8sgRprqVdEvsoqwYxeKn1M62JNiKpLSzP2uB7mihXG9sqmn1G1ckDI>
- <https://www.instagram.com/p/C6RV11oOPwP/>
- <https://twitter.com/movciudadanojal/status/1784251207290085696?s=46&t=G-ASecFLUc7Bzc9jx23wIQ>
- <https://www.youtube.com/watch?v=MhWNmjWDlp8>

*III. Instrumental de actuaciones: Consiste en todo lo actuado dentro del presente expediente, y que favorezca a los intereses y pretensiones del que ahora comparece.*

*IV. Presuncional: En su doble aspecto legal y humano, en todo lo que favorezca a los intereses del suscrito.”*

**V. Naturaleza y finalidad de las medidas cautelares.** De conformidad con lo dispuesto en los artículos 472, párrafo 9, del Código Electoral; y 10 del Reglamento de Quejas y Denuncias de este Instituto Electoral; las medidas cautelares constituyen instrumentos que puede decretar la autoridad competente, a solicitud de parte interesada o de oficio, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes en conflicto o a la sociedad, con motivo de la sustanciación de un procedimiento.

Por tanto, se trata de resoluciones que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la determinación no constituye un fin en sí mismo; y, sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves y su finalidad es prever la dilación en el dictado de la resolución definitiva, así como evitar que el perjuicio se vuelva irreparable, asegurando la eficacia de la resolución que se dicte.

En consecuencia, las medidas cautelares están dirigidas a garantizar la existencia y el restablecimiento del derecho que se considera afectado, cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo.

Bajo esa lógica, las medidas cautelares constituyen una determinación autónoma dentro del procedimiento, cuyo objeto principal es tutelar el interés público, razón por lo cual se previó la posibilidad de que sus efectos sean provisionales, transitorios o temporales, con el objeto de lograr la cesación de los actos o hechos constitutivos de la posible infracción.

Ello, con la finalidad, como ya se apuntó con anterioridad, de evitar la producción de daños irreparables, la afectación de los principios rectores de la materia electoral o la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o la legislación electoral aplicable. Ahora bien, para que en el dictado de las medidas cautelares se cumpla el principio de legalidad, la fundamentación y motivación deberá ocuparse cuando menos, de los aspectos siguientes:

- a) La probable violación a un derecho, del cual se pide la tutela en el proceso y
- b) El temor fundado de que, mientras llega la tutela jurídica efectiva, desaparezcan las circunstancias de hecho necesarias para alcanzar una decisión sobre el derecho o bien jurídico, cuya restitución se reclama (*periculum in mora*).
- c) La irreparabilidad de la afectación.
- d) La idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la medida.

La medida cautelar adquiere justificación si hay un derecho que requiere protección provisional y urgente, a raíz de una afectación producida que se busca evitar sea mayor o de inminente producción, mientras se sigue el procedimiento o proceso en el cual se discute la pretensión de fondo de quien dice sufrir el daño o la amenaza de su actualización.

Atendiendo a esa lógica, el dictado de las medidas cautelares se debe ajustar a los criterios que la doctrina denomina como *fumus boni iuris* –apariencia del buen derecho– unida al *periculum in mora* –peligro en la demora– de que mientras llega la tutela efectiva se menoscabe o haga irreparable el derecho materia de la decisión final–.

Sobre el *fumus boni iuris* o apariencia del buen derecho, se debe precisar que éste apunta a una credibilidad objetiva y seria sobre la juridicidad del derecho que se pide proteger, a fin de descartar que se trate de una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable. Por su parte,

el *periculum in mora* o peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida cautelar, ante el riesgo de su irreparabilidad.

Como se puede deducir, la verificación de ambos requisitos obliga indefectiblemente a que la autoridad responsable realice una evaluación preliminar del caso concreto en torno a las respectivas posiciones enfrentadas, a fin de determinar si se justifica o no el dictado de las medidas cautelares.

En consecuencia, si de ese análisis previo resulta la existencia de un derecho, en apariencia reconocido legalmente de quien sufre la lesión o el riesgo de un daño inminente y la correlativa falta de justificación de la conducta reprochada, entonces se torna patente que la medida cautelar debe ser acordada, salvo que el perjuicio al interés social o al orden público sea mayor a los daños que pudiera resentir el solicitante, supuesto en el cual, deberá negarse la medida cautelar.

Como se puede observar de todo lo anteriormente explicado, es inconcuso entonces que la ponderación de los valores tutelados que justifican los posicionamientos de las partes en conflicto, así como la valoración de los elementos probatorios que obren en el expediente, se convierte en una etapa fundamental para el examen de la solicitud de medidas cautelares, toda vez que cuando menos se deberán observar las directrices siguientes:

- a) Verificar si existe el derecho cuya tutela se pretende.
- b) Justificar el temor fundado de que, ante la espera del dictado de la resolución definitiva, desaparezca la materia de controversia.
- c) Ponderar los valores y bienes jurídicos en conflicto, y justificar la idoneidad, razonabilidad y proporcionalidad de la determinación que se adopte.
- d) Fundar y motivar si la conducta denunciada, atendiendo al contexto en que se produce, trasciende o no a los límites del derecho o libertad que se considera afectado y, si presumiblemente, se ubica en el ámbito de lo ilícito.

De esa forma, la medida cautelar en materia electoral cumplirá sus objetivos fundamentales: evitar la vulneración de los bienes jurídicos tutelados, así como la generación de daños irreversibles a los posibles afectados. Todo ello para que cuando se dicte la resolución de fondo, sea factible su cumplimiento efectivo e integral.

**VI. Acreditación de los hechos y pronunciamiento respecto de la solicitud de adopción de las medidas cautelares.** Precisado lo anterior, y considerado en su integridad el escrito de denuncia y las pruebas aportadas por la parte denunciante, así como las diligencias de investigación realizadas por este Instituto, se analiza la pretensión hecha valer por el denunciante.

Por lo que, se procederá al análisis de los hechos denunciados con el fin de determinar si es procedente la adopción de medidas cautelares, que tengan como objeto restablecer de manera transitoria el ordenamiento jurídico conculcado, desapareciendo eventualmente una situación que se reputa antijurídica, con la finalidad de evitar la generación de daños irreparables; o bien, en su modalidad de tutela preventiva.

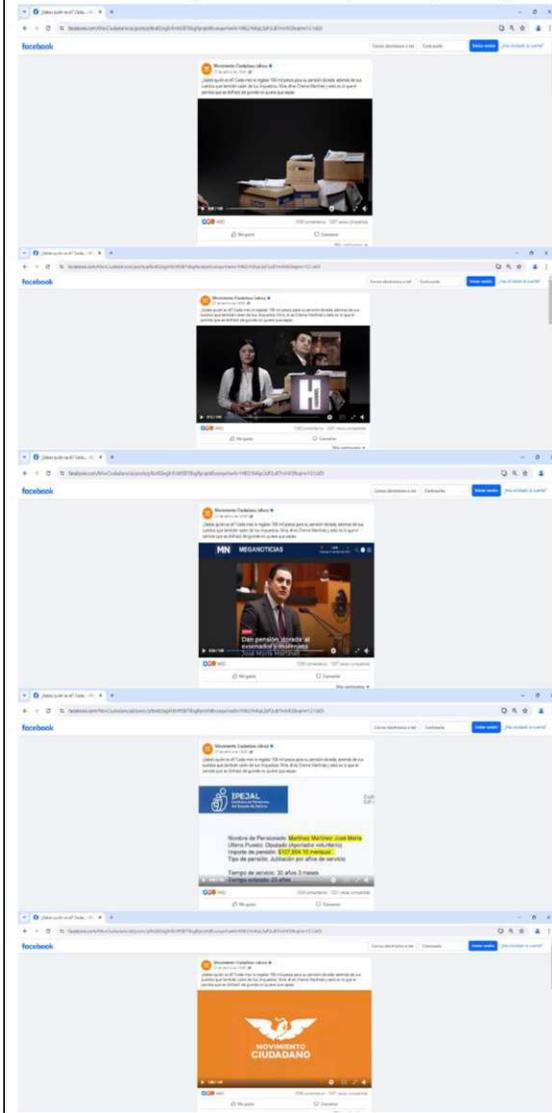
En ese sentido, se desprende la solicitud formulada por el denunciante consiste en la abstención por parte del partido político Movimiento Ciudadano, así como sus militantes, simpatizantes y cualquier otra persona que de oficio advierta esta autoridad para que se abstengan de continuar generando calumnias en contra del promovente. Además, solicita la eliminación del videoclip en las cuatro redes sociales del Partido político **Movimiento Ciudadano**, y en general, las medidas cautelares que de oficio considere esta autoridad.

A efecto de sustentar los hechos denunciados, el quejoso aporta los hipervínculos que direccionan a dichas publicaciones, en la que manifiesta, se promociona de manera ilegítima una publicidad calumniosa y se realiza una campaña de desprestigio conocida como “guerra sucia”.

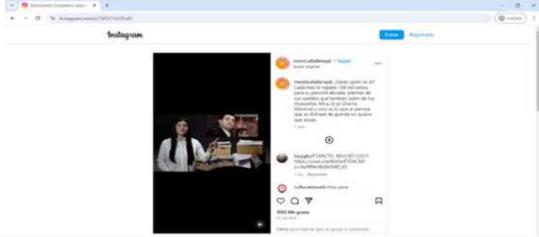
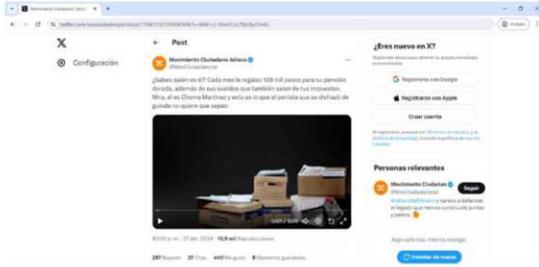
Ahora bien, por lo que ve a la diligencia de investigación que se ordenó para verificar el contenido de los hipervínculos señalados por el denunciante, cuyo resultado obra en el acta de Oficialía Electoral con clave alfanumérica IEPC-OE-328/2024, de fecha cinco de mayo, al tratarse de una documental pública, la misma posee valor probatorio pleno en cuanto a su forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 463, párrafo 2, del Código Electoral, de la cual se desprende la siguiente información:

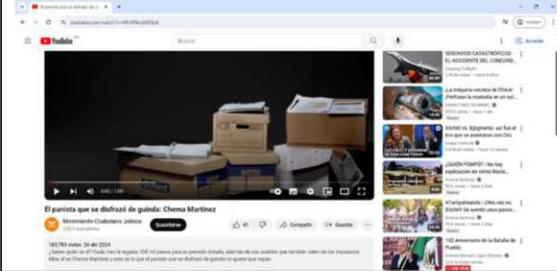
ACTA DE OFICIALIA ELECTORAL IEPC-OE-328-2024		
FECHA	ENLACE	PUBLICACIÓN
27/04/2024	1) <a href="https://www.facebook.com/Mov">https://www.facebook.com/Mov</a>	Dicho enlace me direcciona a la página web de “Facebook”, lo cual puedo identificar por el mismo nombre ubicado en la parte superior

	<p><a href="#">CiudadanoJal/po</a> <a href="#">sts/pfbid02egXr</a> <a href="#">EnWSB7i8sgRprg</a> <a href="#">VdEvsoqwYxeKn</a> <a href="#">1M62JNiKpLSzP</a> <a href="#">2uB7mihXG9sq</a> <a href="#">mn1G1ckDI</a></p>	<p>izquierda en letras azules. A continuación, observo una publicación realizada por el perfil verificado a nombre de “Movimiento ciudadano Jalisco”, el cual tiene como foto de perfil el logo del partido político “Movimiento Ciudadano”. Dicha publicación tiene inserto un video de un minuto de duración con la siguiente descripción: “¿Sabes quién es él? Cada mes le regalas 108 mil pesos para su pensión dorada, además de sus sueldos que también salen de tus impuestos. Mira, él es <b>N5-ELIMINADO</b> y esto es lo que el panista que se disfrazó de guinda no quiere que sepas.”. Fue publicado el día veintisiete de abril del presente año y cuenta con cuatro mil cuatrocientas ochenta y dos interacciones, mil trescientos treinta comentarios y fue compartida mil doscientas veces.</p> <p>A continuación, procedo a describir las imágenes insertas en el video antes mencionado: observo a una mujer de tez clara, cabello castaño oscuro y largo, quien viste una camisa blanca, la cual se encuentra hablando. A su costado se muestran imágenes por unos segundos donde se muestran una pila de cajas de cartón y en seguida a un hombre de tez clara, cabello castaño oscuro, quien viste un saco negro y camisa blanca, y debajo de este aparece por unos segundos la siguiente frase: <b>N6-ELIMINADO</b> seguida de los logos de los partidos políticos “morena”, “PT”, “VERDE”, “FUTURO” y “HAGAMOS”. Después se muestra una serie de imágenes del hombre antes descrito. Continúa hablando la mujer y después se muestra la imagen de unas notas periodísticas con el título “Dan pensión “dorada” al exsenador y morenista <b>N8-ELIMINADO</b> y un documento del “IPEJAL” donde se habla de la pensión que recibe un hombre llamado <b>N7-ELIMINADO 1</b> se señala que es aportador voluntario y se muestra el siguiente monto: “\$107.994-10 mensual”, bajo en concepto “Jubilación por años de servicio”, y debajo se menciona que dicha persona lleva treinta años de servicio con tres meses y veinte años cotizando. Aparece nuevamente la mujer que narra el video y aparecen en pantalla las siguientes frases simultáneamente, “NUESTROS IMPUESTOS”, “DISFRAZADA DE GUINDA”, y “QUE NO REGRESEN”. El video finaliza con la transición de la imagen del logo del partido político “Movimiento Ciudadano”.</p> <p>Ahora procedo a hacer la transcripción del audio contenido en el video de referencia:</p> <p><b>Voz narradora:</b> “Él, él es <b>N9-ELIMINADO</b> candidato de morena, PT, verde, futuro, y hasta de hagamos, lo que <b>N10-ELIMINADO</b> no quiere que sepas es que militó en el pan por 27 veintisiete años, y fue de los</p>
--	--	---

		<p><i>políticos que se sirvió con la cuchara grande, del dinero de la gente, y hoy se cambia de camisa para seguir agarrando hueso, y lo que es peor, mientras tú y yo trabajamos para tener un sustento, el [N11] recibe una pensión ilegal de 108,000 ciento ocho mil pesos mensuales, y sí, sale de nuestros impuestos, ¿te parece justo? a mí tampoco, que no te engañe [N12] es parte de la mafia política que tanto daño le ha hecho a Guadalajara, solo que ahora se disfraza de guinda. No dejemos que regrese.”</i></p> 
<p>27/04/2024</p>	<p>2) <a href="https://www.instagram.com/p/C6RV11oPwP/">https://www.instagram.com/p/C6RV11oPwP/</a></p>	<p>Dicho enlace me direcciona a la página web de “Instagram”, lo cual puedo identificar por el mismo nombre ubicado en la parte superior izquierda de la misma. A continuación, observo un video de un</p>

ELIMINADO 1

		<p>minuto de duración publicado por la cuenta a nombre de <i>"Movciudadanojal"</i>. Al comenzar con dicha reproducción me percató que el contenido de este es el ya verificado en el hipervínculo número <b>"01"</b>, por lo que, se da por reproducido su contenido íntegramente como si a la letra se insertase, en obvio de no caer en repeticiones innecesarias. Fue publicado el día veintisiete de abril y cuenta con mil sesenta y tres interacciones.</p> 
27/04/2024	<p>03) <a href="https://twitter.com/movciudadanojal/status/1784251207290085696?s=46&amp;t=G-ASecFLUc7Bzc9jx23wIQ">https://twitter.com/movciudadanojal/status/1784251207290085696?s=46&amp;t=G-ASecFLUc7Bzc9jx23wIQ</a></p>	<p>Dicho enlace me direcciona a la página web de "X", lo cual puedo identificar por la misma letra ubicada en la parte superior izquierda en color negro. A continuación, observo una publicación realizada por el perfil verificado a nombre de <i>"Movimiento Ciudadano Jalisco"</i>, bajo el usuario <i>"@MovCiudadanoJalisco"</i>. Me percató que se trata del mismo contenido verificado en el hipervínculo número <b>"01"</b> de la presente acta de oficialía, con la misma descripción. Fue publicado el día veintisiete de abril y cuenta con doscientos ochenta y siete reposts, veintisiete citas, cuatrocientas cuarenta me gusta, ocho elementos guardados y 10,9 mil reproducciones. Por lo anterior, se da por reproducido el contenido íntegramente como si a la letra se insertase, en obvio de no caer en repeticiones innecesarias.</p> 
26/04/2024	<p>04) <a href="https://www.youtube.com/watch?v=MhWnmjWDlp8">https://www.youtube.com/watch?v=MhWnmjWDlp8</a></p>	<p>Dicho enlace me direcciona a la página web de <i>"YouTube"</i>, lo cual puedo identificar por el mismo nombre ubicado en la parte superior izquierda en letras negras. A continuación, observo un video de un minuto de duración publicado por la cuenta a nombre de <i>"Movimiento Ciudadano Jalisco"</i>. Al comenzar con dicha reproducción me percató que el contenido de este es el ya verificado en el hipervínculo número <b>"01"</b>, por lo que, se da por reproducido su contenido íntegramente como si a la letra se insertase, en obvio de no caer en repeticiones innecesarias. Dicho video tiene la misma</p>

		<p>descripción que la publicación citada, cuenta con cuarenta y una interacciones, ciento ochenta y tres mil setecientos ochenta y tres vistas y fue publicado el veintiséis de abril del presente año.</p> 
--	--	--

Con relación a los hechos que nos ocupa es de señalar que el Código Electoral, en el artículo 446, párrafo 1, fracción I, señala que son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electores en este Código: los partidos políticos, asimismo, en su artículo 472, párrafo 2, establece que dentro que los procesos electorales, la Secretaría Ejecutiva instruirá el procedimiento especial establecido por el capítulo tercero, cuando se denuncie la comisión de conductas que constituyan calumnia por la imputación de un delito o hecho falso con impacto en un proceso electoral.

En ese sentido, el arábigo 447, párrafo I, fracción X, refiere que serán infracciones de los partidos políticos: la difusión de propaganda política o electoral que contenga expresiones que calumnien a las instituciones, los partidos o a las personas o que realicen actos de violencia de género tendientes a impedir el ejercicio pleno de sus derechos políticos electorales.

Además, el Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, en su en su artículo 6, párrafo 1, fracción I, incisos e), f) e i) establece las características de la propaganda política, electoral y gubernamental, refiriendo lo siguiente:

*“e) La **propaganda política** constituye el género de los medios a través de los cuales los partidos, la ciudadanía y organizaciones difunden su ideología, programas y acciones con el fin de influir en la ciudadanía para que adopten determinadas conductas sobre temas de interés social, y que no se encuentran necesariamente vinculadas a un proceso electoral.*

*f) Se entenderá por **propaganda electoral** al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y*

*difunden los partidos políticos, las candidatas o candidatos y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Asimismo, que la misma contenga las expresiones “voto”, “vota”, “votar”, “sufragio”, “sufragar”, “comicios”, “elección”, “elegir”, “proceso electoral” o cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral.*

*i) Se entenderá por **propaganda gubernamental**, aquella que realicen los poderes públicos y órganos de gobierno a nivel federal, local o municipal; los órganos autónomos o cualquier otro ente público de los tres órdenes de gobierno.”*

La legislación electoral hace referencia a la propaganda política y a la electoral, pero no distingue expresamente entre lo que debe entenderse por propaganda política y propaganda electoral; sin embargo, ello no ha sido obstáculo para que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través del análisis sistemático de la regulación electoral, diferencie ambos conceptos.

Así, al resolver diversos recursos de apelación, entre ellos los expedientes SUPRAP-115/2007, SUP-RAP-198/2009, SUP-RAP-220/2009 y SUP-RAP-201/2009, la Sala Superior, determinó que la propaganda política, en general, tiene el propósito de divulgar contenidos de carácter ideológico, a fin de crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, o a estimular determinadas conductas políticas (como podría ser fomentar el número de afiliados al partido).

Por otro lado, la propaganda electoral, consiste en presentar y promover ante la ciudadanía una candidatura o partido para colocarlo en las preferencias electorales, a través de la exposición de los programas y acciones contenidos en los documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral, con el objeto de mantener informada a la ciudadanía respecto a las opciones de las personas presentadas por los partidos políticos en las candidaturas, las propuestas de gobierno que sustentan, con miras a obtener el triunfo en las elecciones.

En este sentido, la propaganda electoral se caracteriza por hacer llamados explícitos o implícitos al voto, así como por alentar o desalentar el apoyo hacia un partido político o candidatura en particular, a través de la presentación de propuestas, posicionamientos u opiniones respecto diversos temas, por lo que el solo hecho de que el contenido de un mensaje propagandístico no

haga alusión expresamente a la palabra “voto” o “sufragio”, o bien, no solicite de manera directa y clara el ejercicio del voto favorable a la ciudadanía, en modo alguno implica en automático que no se trata de propaganda electoral, pues deben analizarse cuestiones como el elemento subjetivo (persona que emite el mensaje), el material (contenido o fraseo del mensaje) y el temporal (ya sea fuera del proceso electoral, o dentro del mismo y en este caso, la etapa del proceso electoral en que se emita el mensaje) de la propaganda en cuestión, para estar en condiciones para establecer si la verdadera intención consiste, precisamente, en invitar o motivar de manera disfrazada al electorado para que favorezca a determinada opción política en el escenario electoral.

Ahora bien, al relacionar el propósito de cada tipo de propaganda con los fines de los partidos políticos y las actividades que éstos pueden realizar, la Sala Superior ha considerado, al resolver, entre otros, los recursos de revisión del procedimiento especial sancionador con número de expediente SUP-REP-196/2015 y SUP-REP-18/2016, que la clasificación de la propaganda de contenido político o electoral está vinculada al tipo de actividades realizadas por los partidos, ya sea permanentes, [esto es, aquellas tendentes a promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, a contribuir a la integración de la representación nacional, así como a la divulgación de la ideología y plataforma política de cada partido, cuyo ejercicio no puede limitarse exclusivamente a los periodos de elecciones, dado la finalidad que persiguen] o electorales [es decir, las que se desarrollan durante el proceso electoral, con la finalidad de hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan los partidos políticos].

Con base en lo anterior, ha concluido que la propaganda política se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico para generar, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, y la propaganda electoral está íntimamente ligada a los postulados y campaña política de los respectivos partidos y candidatos que compiten en los procesos comiciales para aspirar al poder o posicionarse en las preferencias ciudadanas, con las limitantes que la propia normativa prevé para las campañas.

En el mismo sentido, es importante no perder de vista que los artículos 6º y 7º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran las libertades fundamentales de pensamiento y expresión, al igual que los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevén que el ejercicio del derecho de

libertad de expresión no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. Asimismo, prohíben toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia u otra forma de discriminación.

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación<sup>7</sup>, ha sostenido que el derecho a la libertad de expresión se inserta en una trama de derechos humanos que tiene como uno de sus principales ejes articuladores la dignidad humana, así como el derecho a la información del electorado como elemento fundamental para garantizar el ejercicio del sufragio de manera libre e informada.

Ello supone que en la interpretación y aplicación de las disposiciones constitucionales aplicables, se procure maximizar el derecho humano a la libertad de expresión mediante propaganda y, al mismo tiempo, interpretar en forma estricta las restricciones a tales derechos para no hacerlos nugatorios, particularmente en el desarrollo de precampañas y campañas electorales, en donde es necesario proteger y alentar un debate intenso y vigoroso, como parte de la dimensión deliberativa de la democracia representativa.

En ese sentido, en el debate político, el ejercicio de la libertad de expresión e información ensancha el margen de tolerancia frente a juicios valorativos, apreciaciones o aseveraciones vertidas en esas confrontaciones, cuando se actualice en el entorno de temas de interés público en una sociedad democrática atendiendo al derecho a la información del electorado.

Bajo esa premisa, no se considera transgresión a la normativa electoral la manifestación de ideas, expresiones u opiniones que, apreciadas en su contexto integral, aporten elementos que permitan la formación de una opinión pública libre, la consolidación del sistema de partidos y de las candidaturas independientes, así como el fomento de una auténtica cultura democrática, siempre que no se rebasen los límites constitucional y legalmente establecidos.

---

<sup>7</sup> En lo sucesivo Sala Superior

Así lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral, en la tesis jurisprudencial 11/2008, de rubro: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU MAXIMIZACIÓN EN EL CONTEXTO DEL DEBATE POLÍTICO"<sup>8</sup>.

En la misma tónica, el Internet promueve un debate amplio y robusto, en el que los usuarios intercambian ideas y opiniones, positivas o negativas, de manera ágil, fluida y libremente, generando un mayor involucramiento del electorado en los temas relacionados con la contienda electoral, lo cual implica una mayor apertura y tolerancia que debe privilegiarse a partir de la libertad de expresión y el debate público, condiciones necesarias para la democracia.

En este sentido, es importante tomar en cuenta que, la Sala Regional Especializada del TEPJF<sup>9</sup>, ha sostenido, en diversas resoluciones, que la propaganda electoral alojada en una página correspondiente a una red social de Internet se debe analizar en un contexto de tutela de los principios y valores democráticos que deben regir en las elecciones.

Por lo que, respecto al caso que nos ocupa, se tiene que el denunciante se queja de la comisión de supuestas conductas, que, a su decir, constituyen actos violatorios a la normativa electoral vigente que devienen del partido político **Movimiento Ciudadano**, ejecutados pronunciamientos y actos de calumnia electoral en contra de su persona, mediante publicaciones en redes sociales.

Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior, que la calumnia se encuentra acotada a sujetos específicos, como son los partidos políticos, aspirantes, candidatos, coaliciones, observadores electorales y concesionarios de radio y televisión, entes expresamente regulados, y quienes pueden ser infractores de la conducta reprochable.

Sin embargo, esta restricción no puede ser aplicable a las personas físicas o morales externas a la contienda electoral, a menos que se advierta que detrás de la publicidad existe un partido político o candidato que sea responsable de la misma.

En efecto, las manifestaciones calumniosas de terceros podrían ser sancionadas cuando se demuestre que actúen por cuenta de los sujetos obligados, ya sea en complicidad o en

---

<sup>8</sup> Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 20 y 21.

<sup>9</sup> 1 SRE-PSC-268/2015, SRE-PSC-274/2015, SRE-PSC-283-2015, SRE-PSC-285-2015, SRE-PSC-288/2015 y SRE-PSC8/2016

coparticipación con la finalidad de defraudar la ley. Conviene transcribir el texto de la Tesis XVI/2019 de Sala Superior:

***“CALUMNIA ELECTORAL. LAS PERSONAS PRIVADAS, FÍSICAS O MORALES, EXCEPCIONALMENTE, PODRÁN SER SUJETOS INFRACTORES.**– De la interpretación sistemática de los artículos 41, fracción III, Apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 217, párrafo 1, inciso e), fracción III, 247, párrafo 2, 380, párrafo 1, inciso f), 394, párrafo 1, inciso i), 443, párrafo 1, inciso j), 446, párrafo 1, inciso m), y 452, párrafo 1, inciso d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 25, párrafo 1, inciso o), de la Ley General de Partidos Políticos, se advierte, expresamente, cuáles son las personas que pueden ser sancionadas por calumnia; sin embargo, existen casos excepcionales en los que deben incluirse otros sujetos activos que cometan esa infracción, como las personas privadas, físicas o morales, cuando se demuestre que actúan por cuenta de los sujetos obligados –en complicidad o coparticipación–, a efecto de defraudar la legislación aplicable. En estos casos las autoridades deberán sancionar, tanto a los sujetos obligados a no calumniar dentro del marco de los procesos electorales como a las personas privadas que actúen en complicidad o coparticipación, ya que estarían actuando como agentes de los primeros.”*

Ello es así, pues solo deben ser sancionadas por la infracción de calumnia las personas que prevé la norma y siempre que las expresiones menoscaben gravemente los bienes, también constitucionales, que dan racionalidad a dicha restricción: el que los ciudadanos voten de manera informada y, en su caso, el honor, reputación o imagen de las personas calumniadas con motivo del proceso electoral, partiendo de que, además, cuentan con las vías civiles para poder ejercer su derecho de réplica y ser, en su caso, indemnizados por los daños que les hayan sido ocasionados.

Al respecto, el artículo 472, párrafo 2, del Código Electoral del Estado de Jalisco, así como el artículo 471, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen que, en los procedimientos sancionadores especiales, relacionados con la difusión de propaganda que se considere calumniosa, **deberá entenderse por calumnia la imputación de hechos o delitos falsos con impacto en un proceso electoral.**

Por último, el artículo 25, párrafo 1, inciso o), de la Ley General de Partidos Políticos, refiere que entre las obligaciones de los partidos políticos se encuentra la de abstenerse, en su propaganda política o electoral, de cualquier expresión que denigre a las instituciones y a los partidos políticos o que calumnie a las personas.

En ese sentido, la Tesis XXIII/2008<sup>10</sup>, establece que, con apego a los principios constitucionales que debe cumplir toda elección democrática, impone el deber a los partidos políticos de abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, así como de proferir expresiones que impliquen diatriba, **calumnia**, infamia, injuria, difamación o que denigren a los ciudadanos, a las instituciones públicas, a los partidos políticos o a sus candidatos, en la propaganda política y electoral que utilicen.

Sin embargo, es conforme a Derecho concluir que la propaganda política y electoral debe incentivar el debate público, enfocado a presentar, ante la ciudadanía, las candidaturas registradas; a propiciar la exposición, desarrollo y discusión de los programas y acciones fijados por los partidos políticos.

Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 64/2015 y sus acumuladas 65/2015, 66/2015, 68/2015 y 70/2015<sup>18</sup>, fijó un criterio que abona lo que se debe entender por “calumnia”, de conformidad con el artículo 41, párrafo tercero, Base III, apartado C, de la Ley Fundamental; advierte que el término calumnia se refiriere en su uso cotidiano, según la definición del Diccionario de la Real Académica de la Lengua Española, –en su primera acepción–, que es una acusación falsa, hecha maliciosamente para causar daño; –y en su segunda locución–, que es la imputación de un delito a sabiendas de su falsedad<sup>11</sup>.

Al respecto, la Tesis XXXI/2018<sup>12</sup> de la Sala Superior, refiere que la finalidad de sancionar la calumnia en materia electoral está íntimamente asociada con el deber de garantizar la equidad en la contienda electoral y el derecho de la ciudadanía a decidir su voto razonado a partir de una opinión pública informada. En consecuencia, ha reconocido la especial protección de la que goza el ejercicio periodístico y su presunción de licitud.

Conforme a la normatividad electoral, el máximo tribunal en la materia, ha sostenido que la imputación de hechos o delitos falsos por parte de los partidos políticos o los candidatos, no estará protegida por el derecho a la libertad de expresión, siempre que se acredite tener un grave impacto

---

<sup>10</sup>Tesis XXIII/2008 PROPAGANDA POLÍTICA Y ELECTORAL. NO DEBE CONTENER EXPRESIONES QUE INDUZCAN A LA VIOLENCIA

<sup>11</sup> SUP-REP-123/2023

<sup>12</sup> Tesis XXXI/2018. CALUMNIA ELECTORAL. LOS PERIODISTAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EJERCICIO DE SU LABOR NO SON SUJETOS RESPONSABLES. – <https://www.te.gob.mx/IUSFapp/tesisjur.aspx?idtesis=XXXI/2018&tpoBusqueda=S&Word=calumnia>

en el proceso electoral y haberse realizado de forma maliciosa (malicia efectiva), pues sólo considerando estos elementos en su conjunto se configura el límite constitucionalmente válido a la libertad de expresión.

En ese sentido, la calumnia consiste en el incumplimiento del deber de proporcionar información adecuada para que la ciudadanía pueda emitir un voto informado, atribuyendo dolosa y falsamente a otros, hechos o delitos que no cometieron, lo cual tiene incidencia en el proceso electoral. De tal manera que, el bien jurídico protegido es el derecho al voto informado; ya que la ciudadanía tiene derecho a contar con información suficiente y adecuada a fin de emitir su voto, para lo cual, el debate público abierto y amplio debe ser protegido.

No obstante, la imputación de hechos o delitos falsos a los candidatos no aporta elementos para la toma de una decisión informada, sino que confunde y engaña. Así, en el ámbito electoral, se prioriza la libre circulación de la crítica, incluso la que pueda considerarse severa, vehemente, molesta o perturbadora.

Para la Sala Superior, la prohibición de la calumnia en la propaganda política o electoral tiene, entre otras, la finalidad imperiosa de garantizar el derecho de las y los ciudadanos de ser informados verazmente respecto de hechos relevantes para poder ejercer debidamente sus derechos político-electorales, principalmente, su derecho a votar. En principio, no está permitido que, a través de la difusión de propaganda política o electoral se expresen hechos y delitos falsos a sabiendas, que impacten gravemente en el proceso electoral.

De no ser así, se inhibiría la actividad informativa o crítica, pues ante la posibilidad de incurrir en algún error, la única forma de asegurarse de no cometer una calumnia sería guardando silencio, lo que en una democracia no es admisible.

En este sentido, para establecer la “gravedad del impacto en el proceso electoral”, debe valorarse la imputación del hecho o delito falso en función del contenido y el contexto de la difusión a fin de determinar el grado de afectación en el derecho de las y los ciudadanos a formarse un punto de vista informado sobre los partidos políticos o sus candidatos.

Entonces, de un análisis preliminar a la narración de hechos del denunciante, así como el resultado de la diligencia de investigación, bajo la apariencia del buen derecho, se tiene que, no se desprenden elementos mínimos, aun de carácter indiciario que permitan determinar de manera presuntiva la existencia de elementos constitutivos de propaganda contraria a la ley.

Pues, el resultado que arroja el acta circunstanciada de cuenta, y analizado someramente permite advertir, que, de las manifestaciones realizadas por el denunciado, consistente en:

*“Él, él es Chema Martínez el candidato de morena, PT, verde, futuro, y hasta de hagamos, lo que Chema no quiere que sepas es que militó en el pan por 27 veintisiete años, y fue de los políticos que se sirvió con la cuchara grande, del dinero de la gente, y hoy se cambia de camisa para seguir agarrando hueso, y lo que es peor, mientras tú y yo trabajamos para tener un sustento, el Chema recibe una pensión ilegal de 108,000 ciento ocho mil pesos mensuales, y sí, sale de nuestros impuestos, ¿te parece justo? a mí tampoco, que no te engañe Chema Martínez, es parte de la mafia política que tanto daño le ha hecho a Guadalajara, solo que ahora se disfraza de guinda. No dejemos que regrese.”*

Al respecto, esta Comisión de Quejas y Denuncias considera, desde una perspectiva preliminar, que no se actualiza la figura jurídica de calumnia, porque no se advierte, de manera evidente o explícita, la imputación de hechos o delitos falsos.

Ello, pues bajo la apariencia del buen derecho, se trata de expresiones que desde una perspectiva preliminar podrían estimarse amparadas en el ejercicio del derecho de libre expresión, mismo que es ampliamente protegido en nuestra legislación, sin que las mismas converjan en situaciones que puedan desprestigiar, calumniar o atribuir la imputación de un hecho o delito falso al denunciante, pues incluso invitan al debate público, necesario para una democracia como la nuestra.

Así mismo, del contenido de las publicaciones denunciadas, se desprenden frases como: “¿Sabes quién es él? Cada mes le regalas 108 mil pesos para su pensión dorada, además de sus sueldos que también salen de tus impuestos. Mira, él es **N4-ELIMINAD** esto es lo que el panista que se disfrazó de guinda no quiere que sepas”. Sin embargo, del análisis preliminar, no es posible advertir que dicha propaganda se traduzca en una posible afectación grave al denunciante, la imputación de un hecho falso, o que las manifestaciones contenidas pudieran incurrir en calumnia o propaganda que

denigre, pues no obra a la vista elemento alguno que relacione o permita, de forma indiciaria, identificar que los hechos que se muestran constituyen una violación a la normatividad electoral vigente.

Es de destacar, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que, en materia electoral, las opiniones están permitidas, aunque resulten en fuertes críticas o el discurso contenga manifestaciones que puedan resultar chocantes, ofensivas o perturbadoras, sin que los juicios valorativos, puedan estar sujetos a un canon de veracidad<sup>13</sup>.

En este contexto, la protección a la libertad de expresión se debe extender no solamente a informaciones o ideas generalmente aceptables o neutrales, sino también a las opiniones o a las críticas severas que, permiten a la ciudadanía, candidatos y partidos políticos contrastar las acciones de los gobiernos o las ofertas de las demás opciones políticas.

Es decir, con los elementos del expediente, derivados de las manifestaciones del promovente y de la diligencia que se realizó, de forma preliminar, se advierte que las expresiones denunciadas y su difusión fueron realizadas por el partido político denunciado en ejercicio de su derecho de libertad de expresión. Afirmaciones que, desde una óptica cautelar, no son suficientes para que esta autoridad interprete que, las expresiones motivo de denuncia, se dirijan a imputarle algún delito o un hecho falso al promovente, pues bajo la apariencia del buen derecho, se estima que se trata de manifestaciones generales que constituyen la perspectiva del emisor del mensaje de la situación actual en torno a un tema relevante, lo cual, en principio, está amparado en la libertad de expresión y de información en el contexto del debate político y son válidas como forma de obtener el apoyo de la ciudadanía y desalentar las preferencias por otras fuerzas políticas y candidaturas en el marco de una contienda electoral.

Lo anterior, porque tratándose del debate político en un entorno democrático, es indispensable la libre circulación de ideas e información con relación al actuar de los gobiernos, instituciones, gobernantes, candidatos y partidos políticos por parte de los medios de comunicación, de los propios partidos y de cualquier persona que desee expresar su opinión u ofrecer información. En este contexto, la protección a la libertad de expresión se debe extender no solamente a

---

<sup>13</sup> Ver SUP-REP-13/2021

informaciones o ideas generalmente aceptables o neutrales, sino también a las opiniones o críticas severas.

De igual suerte, al resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador SUP-REP-106/2021, la Sala Superior, determinó que para acreditar los extremos de la calumnia, se debe hacer un análisis contextual del mensaje y del grado de afectación que pueda producir en los principios y valores constitucionales que hagan necesaria la adopción de las medidas cautelares, de tal suerte que, salvo que existan elementos para suponer que la afectación a un derecho o principio resulta evidente o manifiesta, la finalidad de la propaganda es informar y presentar al electorado las diferentes propuestas y puntos de vista que proponen los partidos, siendo que, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han enfatizado la necesidad de garantizar la circulación desinhibida de mensajes sobre cuestiones políticas.

Por lo tanto, en el debate democrático, es válida la circulación de ideas que permita a la ciudadanía cuestionar e indagar respecto de la capacidad, probidad e idoneidad de las y los candidatos, de los funcionarios y de los partidos políticos, cuyas propuestas, ideas, opiniones o desempeño pueden comparar, compartir o rechazar.

Por lo que, esta autoridad considera que respecto a la solicitud del promovente consistente en que se ordene la eliminación inmediata de las publicaciones **resulta improcedente**.

Respecto a la solicitud que realiza el quejoso para que el denunciado, partido político, militantes y simpatizantes se abstengan de continuar generando actos de calumnia, **devienen improcedentes**, toda vez que se tratan de hechos futuros de realización incierta.

Bajo esa tesitura, se ha considerado que los hechos futuros de realización incierta son actos futuros cuyo acontecimiento puede ser contingente o eventual, por lo que no existe seguridad de que sucederán. En ese contexto, las medidas cautelares, en su vertiente de tutela preventiva, tienen por objeto prevenir la comisión de hechos infractores, por lo que es posible que se dicten sobre hechos

futuros a fin de evitar que atenten contra el orden jurídico en el supuesto que los hechos contraventores, aunque aún no sucedan, sean de inminente realización como, por ejemplo<sup>14</sup>:

- Que su verificación dependa simplemente del transcurso del tiempo.
- Que su acontecimiento sea consecuencia forzosa e ineludible de otros hechos que sucedieron con anterioridad.
- Que se infiera la verificación de acciones concretas dirigidas específicamente a generarlos porque de manera ordinaria se constituyen como preparatorios de su realización.

Finalmente, es dable precisar que respecto a la solicitud que formula el denunciante para que esta Comisión dicte las medidas cautelares que de oficio considere pertinentes, al tenor de las consideraciones de líneas que anteceden, de forma preliminar no se advierte la necesidad del dictado de ninguna medida o que alguno de los principios fundamentales de la contienda electoral se encuentre en riesgo.

Es importante destacar, que las anteriores consideraciones no determinan la existencia o no de las infracciones denunciadas, lo que no es materia de la presente resolución, es decir, que, si bien en la misma este órgano colegiado ha determinado la improcedencia de la adopción de las medidas cautelares, ello no condiciona la conclusión que en el momento procesal oportuno adopte el órgano resolutor al realizar el análisis del fondo del asunto.

Por las consideraciones antes expuestas y fundadas, esta Comisión

#### **RESUELVE:**

**Primero.** Se declara **improcedente** la adopción de las medidas cautelares **en los términos solicitados** por el denunciante, por las razones expuestas en la presente resolución.

**Segundo.** Túrnese a la Secretaría Ejecutiva, de este Instituto Electoral, a efecto de que notifique el contenido de la presente determinación, personalmente a las partes.

---

<sup>14</sup> Criterio sostenido por la Sala Superior al resolver los expedientes SUP-REP-0016/2017 y SUP-REP-010/2018.

**Guadalajara, Jalisco, a 31 de mayo de 2024**

**Moisés Pérez Vega  
Consejero electoral presidente.**

**Miguel Godínez Terríquez  
Consejero electoral integrante.**

**Brenda Judith Serafín Morfin  
Consejera electoral integrante.**

**Catalina Moreno Trillo  
Secretaria técnica.**

***Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el acuerdo del Consejo General  
identificado con la clave alfanumérica IEPC-ACG-063/2023”***

La presente resolución que consta de veintitrés fojas fue aprobada en la **vigésima cuarta sesión extraordinaria** de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, celebrada el treinta y uno de dos mil veinticuatro, por unanimidad de votos de la consejera y los consejeros integrantes de la comisión. -----  
-----



## FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

3.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

4.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

5.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

6.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

7.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

8.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

9.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

10.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

11.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

12.- ELIMINADO el nombre de un particular, por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

\* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus

# FUNDAMENTO LEGAL

Municipios."